

AUTO N. 05632

“POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante el **Auto No. 1319 del 26 de mayo de 2015**, en contra del señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 150 A No 103 C – 62 piso 2 de la localidad de Suba de esta ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que, el precitado Auto se notificó personalmente al señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, el día 16 de julio de 2015, con constancia de ejecutoria del 17 de julio de 2015, publicado en el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente el día 31 de agosto del 2015, y comunicado a la Procuradora General de la Nación Radicado No. 2015EE144477 de 04 de agosto de 2015.

Que, posteriormente mediante **Auto No. 7214 del 31 de diciembre de 2015**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, formuló pliego de cargos en contra del señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 150 A No 103 C – 62 piso 2 de la localidad de Suba de esta ciudad, así:

“Cargos Primeros: Superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, zona residencial, en un horario nocturno, mediante el empleo de un amplificador multicanal y dos parlantes, contraviniendo lo normado en la Tabla No. 1 del artículo 9° de

la Resolución 0627 de 2006.

Cargo Segundo: Presuntamente generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas, y no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas según lo establecido en los Artículos 45 y 51 del decreto 948 de 1995.”

Que el mencionado acto administrativo fue notificado por edicto el día 24 de junio de 2016, con constancia de ejecutoria el día 27 de junio de 2016, al señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 150 A No 103 C – 62 piso 2 de la localidad de Suba de esta ciudad.

Que mediante radicado No. 2015ER169026 de 07 de septiembre de 2015, la señora **RUTH STELLA SARMIENTO BOHORQUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 51.795.943, y portadora de la tarjeta profesional No 110.126 del CSJ, en calidad de apoderada judicial del señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 150 A No 103 C – 62 piso 2 de la localidad de Suba de esta ciudad, solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta al establecimiento de comercio mediante Resolución 0643 del 25 de mayo de 2015, y en el mismo solicitaba la notificación de las actuaciones administrativas correspondientes al presente procedimiento sancionatorio en las siguientes direcciones: “Mi mandante en la Calle 143 No 111 – 82 barrio Lombardía de Bogotá D.C., el nuevo propietario del establecimiento de comercio, CAMILO ANDRES ALARCON SUESCA, en la Calle 150 A No 103 C 62 piso 2 de la localidad de suba, recibo notificaciones en la carrera 114 A No 147 A -54 Apto. 302 de la ciudad de Bogotá y/o en la Diagonal 19 No 19 B – 16 de Villavicencio. (...)”

Que, por lo anterior mediante **Auto No. 02695 del 10 de junio del 2018**, ordena la notificación del contenido del **Auto No. 7214 de 31 de diciembre de 2015** al señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en la Calle 143 No. 111 - 82 Barrio Lombardía de esta Ciudad, y a la señora **RUTH STELLA SARMIENTO BOHORQUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.795.943 en calidad de apoderada especial en la Carrera 114 A No 147 A – 54 apto 302 de la ciudad de Bogotá y en la diagonal 19 No 19 B – 16 de la ciudad de Villavicencio (meta).

Que el anterior acto administrativo fue notificado al señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, por aviso el día 16 de julio de 2021, previo aviso citatorio mediante radicado No 2018EE238093 del 10 de diciembre de 2018, a su vez fue notificada por aviso a la señora **RUTH STELLA SARMIENTO BOHORQUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.795.943 en calidad de apoderada el día 14 de julio de 2021, previo aviso citatorio mediante radicado No. 2018EE238089 del 10 de diciembre de 2018.

Que, el **Auto No. 7214 de 31 de diciembre de 2015**, se notifico por edicto fijado el 02 de agosto del 2021, y desfijado el 09 de agosto del 2021; al señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**,

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en la Calle 143 No. 111 - 82 Barrio Lombardía de esta Ciudad,

Que, para garantizar el derecho de defensa el señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en los términos del artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contaba con un término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del **Auto No. 7214 de 31 de diciembre de 2015** notificado mediante **Auto No. 02695 del 10 de junio del 2018**, para presentar escrito de descargos en contra el citado Auto, esto es del día 10 de agosto al 24 de agosto del 2021, sin que se pudiese evidenciar radicado alguno que refiera a un escrito de descargos.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, esta Dirección se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se toman.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Que desde el punto de vista procedimental se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, esta Autoridad está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el proceso sancionatorio.

Que en el párrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, se establece: “Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo solicite”.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, la práctica de las pruebas consideradas conducentes, se deben llevar a efecto dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que las decreta, término que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba.

Que todos los documentos relacionados con la investigación adelantada, los cuales forman parte del expediente **SDA-08-2015-1511**, se tendrán en cuenta en el presente caso para llegar al convencimiento necesario que permita el respectivo pronunciamiento.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece que:

“Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1'000.000) de habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones

contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”

Por su parte, el inciso 2 de artículo 107 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 establece:

“(…) “Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares (…)”

Que es función de la Secretaría Distrital de Ambiente, controlar y vigilar el cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, en consecuencia, emprender las acciones de policía que sean pertinentes, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las mencionadas normas.

III. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS

Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de los mismos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. *Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.*” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Que en el párrafo del artículo 25 de la ley 1333 de 2009, se establece:

“Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien lo solicite”.

Que, para garantizar el derecho de defensa el señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en los términos del artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contaba con un término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del **Auto No. 7214 de 31 de diciembre de 2015** notificado mediante **Auto No. 02695 del 10 de junio del 2018**, para presentar escrito de descargos en contra el citado Auto, esto es del día 10 de agosto al 24 de agosto del 2021, sin que se pudiese evidenciar radicado alguno que refiera a un escrito de descargos, siendo esta la oportunidad procesal con que contaba para aportar y/o solicitar la práctica de pruebas que estimara conducentes, pertinentes y útiles.

IV. DE LAS PRUEBAS

Que la etapa probatoria tiene como objeto producir elementos de juicio, encaminados a obtener determinadas piezas probatorias tendientes a crear convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, con fundamento en sus pretensiones o defensas.

Que dichas piezas procesales deben ser necesarias, conducentes y pertinentes, toda vez que los hechos articulados en el proceso son los que constituyen el tema a probar, y estos tendrán incidencia sobre lo que se va a concluir en el mismo.

Que, en concordancia con lo anterior, al respecto de los principios probatorios de pertinencia y conducencia, el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta), en decisión del diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), Rad. 18093, Consejero Ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, se pronunció de la siguiente manera:

“El artículo 168 del C.C.A. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. (...)”

Que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A" CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01(0864-07), la prueba debe ser entendida:

“En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella sino un medio del que nos servimos para establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno o malo, completo o incompleto; por su parte para Ricci “la prueba no es un fin por sí mismo, sino un medio dirigido a la consecución de un fin, que consiste en el descubrimiento de la verdad” y agrega que “antes de emplear un medio para conseguir el fin que se persigue es de rigor convencerse de la idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se busca” y por último Framarino anota en su “Lógica de las pruebas en materia Criminal” que la finalidad suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es el medio objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu.

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la prueba debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir el juez al momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor de convicción de un medio o conjunto de medios probatorios. El artículo 168 del C.C.A. prevé que en los procesos que se surtan ante esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de

los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con las normas del C.C.A. marginalmente (...)"

Continúa el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta frente a la noción de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas:

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley."

Por esta razón, es necesario acudir a los dictámenes establecidos en el Código General del Proceso el cual, determina en cuanto a las pruebas, lo siguiente:

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Art. 164 del C.G.P.).
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Art. 165 del C.G.P.).
3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Art. 167 del C. G P.).
4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará *in limine* las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Art. 168 del C. G P.)

Que, en armonía con lo anterior, tenemos que las pruebas son un medio de verificación de las afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con el fin de otorgarle al operador jurídico las pautas necesarias para tomar una decisión.

Que, aunado a lo anterior, se tiene que no sólo se necesita allegar oportunamente las pruebas que se pretende hacer valer dentro del proceso, sino que estas deben ser congruentes con el objeto del mismo, igualmente éstas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad.

Que el tratadista Nattan Nisimblat en su libro *“Derecho Probatorio - Principios y Medios de Prueba en Particular Actualizado con la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1437 de 2011”*, en las páginas 131 y 132, al respecto de los requisitos intrínsecos de la prueba, definió lo siguiente:

“2.3.1.1. Conducencia.

La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico (elementos ad substantiam actus y ad probationem) (...)

2.3.1.2. Pertinencia.

Inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non relevant. La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el “tema probatorio”. Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate (...)

2.3.1.3. Utilidad.

En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.”

Que desde el punto de vista procedimental se tiene en cuenta, con base en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, que esta Autoridad ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el presente procedimiento sancionatorio.

Que el párrafo del artículo de práctica de pruebas citado en el párrafo anterior determinó que: *“Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas”*

V. DEL CASO CONCRETO

Que, de conformidad con la normativa, la doctrina y la jurisprudencia señaladas de manera precedente, el tema de la prueba se refiere a los hechos que se deben investigar en cada proceso, que para el caso que nos ocupa corresponden a aquellos que llevaron a la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente a formular pliego de cargos mediante el **Auto No. 7214 de 31 de diciembre de 2015** notificado mediante **Auto No. 02695 del 10 de junio del 2018**, en contra del señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 150 A No 103 C – 62 piso 2 de la localidad de Suba de esta ciudad, lo cual se hace necesario probar o desvirtuar mediante las pruebas que de forma legal se aporten o practiquen dentro del presente procedimiento administrativo.

Que, para garantizar el derecho de defensa el señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en los términos del artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, contaba con un término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del **Auto No. 7214 de 31 de diciembre de 2015** notificado mediante **Auto No. 02695 del 10 de junio del 2018**, para presentar escrito de descargos en contra el citado Auto, esto es del día 10 de agosto al 24 de agosto del 2021, sin que se pudiese evidenciar radicado alguno que refiera a un escrito de descargos.

A su vez, y como quiera que esta Entidad dentro de esta etapa probatoria podrá ordenar de oficio las que estime necesarias, conforme al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, se considera que, por guardar directa relación con el cargo imputado, resulta procedente la incorporación de las siguientes pruebas:

- **Concepto Técnico No. 11506 del 24 de diciembre del 2014**, junto con sus anexos, emitido por la Subdirección del Calidad de Aire, Auditiva y Visual.

Esta prueba es **conducente** puesto que, el **Concepto Técnico No. 11506 del 24 de diciembre del 2014**, es un medio idóneo para demostrar la existencia de los hechos que dieron origen al incumplimiento de normas de carácter ambiental, que en este caso versa sobre el superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, zona residencial, en un horario nocturno, mediante el empleo de un amplificador multicanal y dos parlantes, generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas y no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas, infringiendo con esta conducta la normatividad ambiental.

Es **pertinente** toda vez que, el **Concepto Técnico No. 11506 del 24 de diciembre del 2014**, demuestra una relación directa entre los hechos investigados, relacionados al superar presuntamente los estándares máximos permisibles de emisión de ruido en un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, zona residencial, en un horario nocturno, mediante el empleo de un amplificador multicanal y dos parlantes, generar ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas y no emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturbaran las zonas aledañas habitadas, infringiendo con esta conducta la normatividad ambiental.

Corolario de lo anterior, esta prueba resulta **útil** puesto que con ella se establece la ocurrencia del hecho investigado, por lo que **Concepto Técnico No. 11506 del 24 de diciembre del 2014**, es el medio probatorio necesario para demostrar la ocurrencia del hecho constitutivo de infracción ambiental en materia de fauna silvestre.

Que, en consecuencia, de lo expuesto, se tendrá como prueba el **Concepto Técnico No. 11506 del 24 de diciembre del 2014**, por ser el medio probatorio conducente, pertinente y necesario para el presente caso, a fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente auto y como se dispondrá en la parte dispositiva de este acto administrativo.

VI. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 1 de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, se delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“1. Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.”

Que, en mérito de lo expuesto, esta Entidad,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - **ORDENAR la apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Secretaría mediante el Auto No. 1319 del 26 de mayo de 2015**, en contra del señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508, en calidad de propietario del establecimiento de comercio ubicado en la calle 150 A No 103 C – 62 piso 2 de la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., por un término de treinta (30) días, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO PRIMERO. - El presente término podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, para lo cual deberá estar soportado en los correspondientes conceptos técnicos que establezcan la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

PARÁGRAFO SEGUNDO- La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a cargo de la parte solicitante, conforme lo señala el parágrafo del Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO. – De oficio, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, incorporar y practicar como prueba dentro del proceso sancionatorio de carácter ambiental, la siguiente por ser pertinente, conducente y necesaria, para el esclarecimiento de los hechos:

1. Incorporar el siguiente documento obrante en el expediente **SDA-08-2015-1511**:
 - **Concepto Técnico No. 11506 del 24 de diciembre del 2014**, junto con sus anexos, emitido por la Subdirección del Calidad de Aire, Auditiva y Visual.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Auto al señor **WILLIAM JAVIER GUTIERREZ GARAY**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.192.508 en la Calle 143 No 111 – 82 barrio Lombardía de Bogotá D.C.; y a su apoderada señora **RUTH STELLA SARMIENTO BOHORQUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No 51.795.943, portadora de la tarjeta profesional No 110.126 del CSJ, en las siguientes direcciones: carrera 114 A No 147 A – 54 apto 302, de la localidad de Suba de esta ciudad y en la diagonal 19 No 19 B – 16 de la ciudad de Villavicencio - (Meta), de conformidad con lo establecido en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

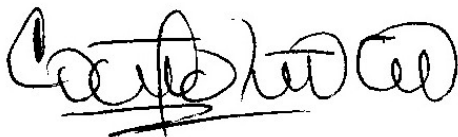
ARTÍCULO CUARTO. - El expediente **SDA-08-2015-1511**, estará a disposición de la parte interesada en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo preceptuado en el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO. - Contra la presente providencia **No** procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Expediente SDA-08-2015-1511

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de diciembre del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

JENNIFER CAROLINA CANCELADO
RODRIGUEZ

CPS: Contrato 2021-0200 de 2021 FECHA EJECUCION: 22/11/2021

Revisó:

STEFANY ALEJANDRA VENCE MONTERO

CPS: CONTRATO 2021-0139 DE 2021 FECHA EJECUCION: 29/11/2021

JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN

CPS: CONTRATO 2021462 DE 2021 FECHA EJECUCION: 29/11/2021

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR

CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCION: 01/12/2021